

ADAPTACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Javier Piñol, Asesor Técnico de la Generalitat Valenciana.
Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Valenciana.

protección residenciada en la ley.

Tradicionalmente, y en especial desde 1978, en aparente contradicción con lo indicado anteriormente, el legislador ha centrado su esfuerzo por proteger, hasta elevarlo a rango constitucional, el derecho que todos tienen de acceso a la cultura, siendo tarea de los poderes públicos la promoción y tutela de dicho acceso (artículo 44 C.E.). En este contexto, adquiere gran relevancia el trabajo que desde la administración estatal (artículo 149.1.28ª C.E.)¹ y autonómica (artículo 148.1.15ª y 17ª)² se realiza a través de las bibliotecas

tareas de reproducción y préstamo, un ámbito de libertad condicionada al cumplimiento de determinados requisitos. El artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/1996 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), siguiendo la estela de la Ley de 1987, establece las condiciones dentro de las cuales podrá practicarse la reproducción y el préstamo en determinadas instituciones, rezando del siguiente tenor: "1. Los titulares de los derechos de autor no podrán



1.- El Plan de Fomento a la Lectura 2001-2004, incluye entre sus líneas de actuación, el objetivo prioritario de potenciar las bibliotecas públicas de titularidad estatal, así como apoyar las acciones de desarrollo de las bibliotecas públicas que llevan a cabo las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, como responsables de la mejora y la gestión de los servicios bibliotecarios en sus respectivos ámbitos territoriales. También establece como uno de sus elementos principales, la mejora de la red de bibliotecas públicas y escolares.

2.- Ley 10/1986, de 30 de diciembre, de Organización Bibliotecaria de la Comunidad Valenciana. Exposición de Motivos: "La Generalitat Valenciana, que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.6 de la Ley Orgánica 5/ 1982, de 1 de julio, tiene competencia exclusiva en materia de bibliotecas que no sean de titularidad estatal...deberá fomentar la lectura mediante la creación de la adecuada infraestructura bibliotecaria para la consecución de sus objetivos, proteger su patrimonio bibliográfico y ponerlo al servicio de todos los ciudadanos".



En la actual sociedad de la información, los avances tecnológicos nos dan la posibilidad de acceder a diferentes contenidos culturales. Desde la versión completa de una obra literaria o científica, la representación en imágenes de una obra plástica, el archivo sonoro de una obra musical o el visionado de una obra audiovisual o cinematográfica, hasta el copioso entramado que se confecciona, día a día, en forma de comentarios, estudios y análisis sobre tan vasto contenido, desde cualquier punto, y a través del manejo de una terminal conectada a la Red. La libre difusión de todo un universo de contenidos culturales, la información accesible sobre aspectos relativos a las obras y sus autores, y aun más, la posibilidad de obtener copias de todo ello, colisiona frontalmente con los intereses morales y patrimoniales de autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual, quienes individual o colectivamente intentan obtener una

públicas y escolares, e instituciones como museos, archivos, hemerotecas, fonotecas y filmotecas de titularidad pública. Los conceptos de Préstamo y Reproducción como derechos individuales o facultades públicas de interés general, cobran vida y hallan, en su confluencia, la imposibilidad de llenar plenamente los intereses de los autores y la tarea de aquellos que, preocupados por poner en la sociedad los medios por alcanzar la función social de acceso a la cultura, realizan su trabajo diario en alguna de las instituciones citadas, con especial mención de las bibliotecas públicas.

Con el fin de acotar el problema, darle solución y encontrar un punto de equilibrio entre intereses públicos y privados, el legislador de 1987 introdujo, a través de la Ley de Propiedad Intelectual, un sistema de límites que permitiera, sin desconocer los derechos de los autores o los legítimos intereses de sus cesionarios, un acceso restringido al ejercicio legítimo de las

oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquellas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos, de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico, y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación. – 2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de los derechos ni les satisfarán remuneración por los préstamos que realicen".

Un somero análisis del precepto transcrito nos lleva a enunciar como límites del derecho que tiene el autor de prohibir

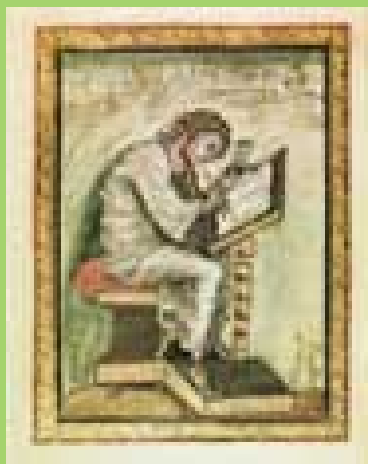
las reproducciones realizadas sin su autorización: -1º, la ausencia de finalidad lucrativa; -2º, la necesidad de que la reproducción se realice por alguna de las instituciones que enumera y; -3º, un exclusivo fin de investigación. Respecto del derecho de préstamo realizado por esas instituciones, no sólo no se precisa autorización, sino que, además, se prescinde de la necesidad de remunerar a los titulares de los derechos de autor.

Por otro lado, el artículo 31 TRLPI, reconoce el derecho de copia privada,

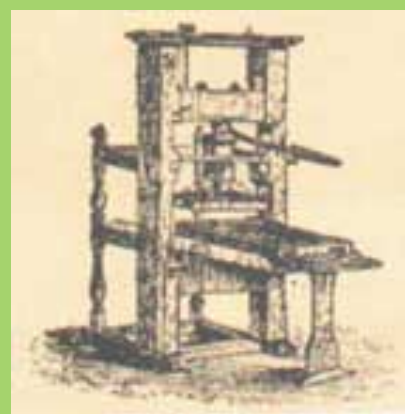
con fines de ilustración de la enseñanza o de investigación científica, sin interés comercial e indicando la fuente de los datos obtenidos. Tratándose de una base de datos no electrónica se permite la reproducción de sus contenidos con fines privados.

Si bien el equilibrio creado ha permitido la convivencia, no siempre pacífica, entre los intereses de los autores y los derechos de los usuarios, con la llegada de la sociedad de la información se hace necesario buscar medidas eficaces de protección tanto desde un punto de vista

que se completa con la posibilidad de reproducir, con alta calidad, obras en soportes tangibles de nueva creación (CDRom, DVD). Con la intención de lograr un nuevo equilibrio, hoy por hoy cuestionado por la mayoría de los sectores afectados según sus propios intereses, el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, siguiendo las indicaciones de la Directiva 2001/29/CE, de 21 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo ³ ha elaborado un anteproyecto de ley de reforma del TRLPI, donde se alteran, entre otros contenidos,



³- Directiva Europea relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.



A través de las siguientes imágenes, se puede apreciar una evolución de la actividad intelectual a lo largo de los siglos.

por medio del cual, amparado en la ausencia de finalidad colectiva o lucrativa en la utilización de la copia, todo usuario puede reproducir cualquier tipo de obra sin la autorización de su autor.

El legislador, preocupado por la protección jurídica de las bases de datos transpuso la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de marzo de 1996, incorporándola al derecho español a través de la Ley 5/1988, 6 de marzo, reconociéndose la existencia de derechos de autor sobre la selección o disposición original de sus contenidos, así como la protección de los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta, como son el tesoro y los sistemas de indexación. El derecho de reproducción reconocido en el artículo 18 del TRLPI, encuentra un límite (art. 34) que posibilita el acceso a las bases de datos, sin necesidad de la autorización del autor, cuando se realice

tecnológico como legislativo. El entorno digital permite la transmisión interactiva de infinidad de contenidos culturales o científicos y la libre prestación de servicios relacionados con estos contenidos a través de la red, con el consiguiente aumento del riesgo de vulneración de los derechos de autor.

La influencia de las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicaciones (T.I.C.) y la adaptación del orden normativo existente, (que debe contemplar la posibilidad de obtener una pluralidad de contenidos culturales de forma interactiva en cualquier momento y desde cualquier lugar, bien mediante el acceso a una obra almacenada en un servidor (streaming), bien mediante la obtención de una copia de esa obra en el disco duro de un ordenador (download), el tráfico de estos contenidos por la red (peer to peer) sin la intervención de intermediarios, y la prestación de servicios a la carta, ayudará a construir un panorama

los conceptos de derecho de reproducción, derecho de distribución, puesta a disposición, copia privada, derecho de cita y la libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones.

A continuación, haremos un breve análisis de la reforma y su posible repercusión en la actividad que realizan las bibliotecas públicas:

Derechos de reproducción y distribución

La propuesta de reforma se detiene en la ampliación de conceptos no suficientemente claros en el texto anterior. Al definir el derecho de distribución (art. 19) se hace referencia al "soporte tangible", excluyéndose así la transmisión de datos realizada a través de la red, que supondrá un acto de comunicación pública. El concepto de reproducción (art. 18) incluye la totalidad de los actos de reproducción realizados en línea (on line) o fuera de línea (off line) por cualquier

medio y en cualquier forma, directamente o a través de intermediario, provisional o permanentemente.

La distribución (préstamo) y la reproducción sin autorización del autor, quedan limitadas, en las bibliotecas públicas, a determinados actos que se declaran exentos, como veremos, en el artículo 37 del anteproyecto.

Derecho de comunicación pública

Se añade un supuesto consistente en “la puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o

Derecho de cita

Se excluye la necesidad de citar la fuente o el autor en los casos en que resulte imposible (art. 32).

El primer borrador del anteproyecto incluía la posibilidad de utilizar obras para la ilustración con fines educativos o de investigación científica sin autorización del autor. El anteproyecto, sin embargo, no recoge esta posibilidad, con el consiguiente perjuicio para la actividad de las bibliotecas públicas en general y para las pertenecientes a instituciones docentes integradas en el sistema

pública”. Esto va a provocar un gran perjuicio para la propia institución cultural privada que verá gravadas sus funciones al realizar actos de reproducción, préstamo y consulta mediante terminales, produciéndose con ello, indirectamente, un perjuicio para los usuarios en su acceso a la información.

Especial mención merece la inclusión de actos de consulta mediante red cerrada interna a través de terminales especializados, instalados en



inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija” (art. 20.2).

La actividad de comunicación pública queda, igualmente, limitada por lo dispuesto en el citado artículo 37.

Copia privada

Se incluye el límite obligatorio (impuesto por la Directiva Europea) consistente en la reproducción provisional, transitoria o accesorio y sin finalidad económica, integrante de un proceso tecnológico cuyo fin sea una transmisión en red por medio de intermediario (art. 31). Es la llamada “copia caché” en el ordenador del usuario.

Se excluye de la consideración de copia privada, la efectuada mediante equipos, aparatos y materiales puestos a disposición del público u objeto de distribución mediante precio.

educativo español en particular.
La libre reproducción y préstamo en determinadas instituciones

El anteproyecto modifica el contenido y la rúbrica de este artículo, “Actos específicos de reproducción, préstamo y consulta mediante terminales especializados en determinados establecimientos”. La reforma incluye los fines de conservación, junto a los ya existentes de investigación. Sin embargo, atribuye la exención, únicamente, a aquellas entidades en cuya normativa se incluyan estos fines como propios, excluyendo al resto de instituciones. Entre los tipos de préstamo se incluye el interbibliotecario.

En cuanto al tipo de instituciones incluidas en el límite, si bien el primer borrador se refería a bibliotecas “accesibles al público”, el anteproyecto restringe el ámbito a aquellas que sean de “titularidad

determinados establecimientos, únicamente a fines de investigación.

El primer borrador del anteproyecto añadía el estudio personal como fin exento, lo que suponía la posibilidad de las bibliotecas públicas de prestar este tipo de servicios sin necesidad de autorización, posibilidad que se diluye en la redacción del anteproyecto, con la consiguiente merma en la actividad ejercida por las bibliotecas.

Como conclusión, diremos que, el texto del anteproyecto, si bien integra la regulación de los avances tecnológicos, pierde la oportunidad de modificar conceptos que, todavía, quedan oscuros en el TRLPI, y de adaptar la legislación a las necesidades de la población en el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la cultura.